

Las primeras nubes en el horizonte

EDUARDO BALLÓN¹

Apoco más de un mes de instalado el nuevo Gobierno, algunas de las incertidumbres y dudas que generó se han ido aclarando. La composición del nuevo gabinete y los discursos, tanto el del Presidente al asumir su mandato en el Congreso como el del Premier en su presentación en el mismo recinto, adelantaron algunas respuestas. Ni todas las que se esperaban, ni siempre satisfactorias, pero respuestas al fin y al cabo. Sin embargo, de acuerdo con las últimas encuestas, la población tiene una valoración favorable de la gestión presidencial y se muestra relativamente optimista sobre su futuro. Ciertamente que los estratos A y B son los más optimistas, pero no se puede desconocer que el cambio de gobierno ha aireado la vida política del país e incluso ha generado expectativas entre la población.

LA COMPOSICIÓN DEL GABINETE

El nombramiento de Jorge del Castillo como Primer Ministro supone jugar la mejor carta aprista posible desde el primer momento. Por la presencia y el liderazgo que tiene en la estructura del partido de Haya de la Torre, cuanto por sus visibles contactos y buenas relaciones con diversos y poderosos grupos económicos, el Premier asegura la orientación del primer gabinete y parece descartar la figura de un Presidente del Consejo de Ministros independiente y autónomo, afirmándose como el principal operador político del régimen.

El nuevo equipo ministerial confirma una tendencia que se observó desde la segunda vuelta electoral. La derecha, derrotada en los comicios, es hoy parte del gobierno y parece haber asegurado condiciones que le garantizan la continuidad del modelo. La conformación del gabinete muestra una decisión clara de establecer vínculos sólidos con las élites económicas. Los nuevos ministros de Economía, Comercio Exterior, Producción y Transportes garantizan esas relaciones.

La presencia de figuras de indudable prestigio democrático como Alan Wagner y José Antonio García Belaunde, no modifica esta tendencia, como tampoco lo hace la presencia de Juan Valdivia en el Ministerio de Energía y Minas, que, sin embargo, expresaría la búsqueda de cierta fuerza para la negociación con las grandes empresas mineras. La presencia de civiles en las carteras de Defensa e Interior es digna de elogio, más allá de las razonables dudas sobre las calificaciones de la ministra Mazzetti, exitosa ex ministra de Salud, en materia de seguridad ciudadana.

Con su presencia en los ministerios de la Mujer y el Desarrollo Social, Agricultura, Vivienda, Educación y Trabajo, el partido de gobierno apunta al control de los sectores que le permitan aplicar una estrategia orientada a los sectores que se encuentran en situación de pobreza y exclusión.

LOS MENSAJES DEL PRESIDENTE Y EL PREMIER

El 28 de julio, el objetivo central del mensaje del Presidente fue tratar de convencer a los ciudadanos más alejados del Estado y críticos de la política y del manejo económico, de que el nuevo gobierno tomará decisiones que los incluyan. Así, la parte más efectista de su intervención se concentró en el tema de la austeridad, sobre todo en los sueldos del Ejecutivo y del Congreso, asunto particularmente sensible en la relación entre el Estado y la ciudadanía. El tema de la reforma del Estado se limitó significativamente a la simplificación administrativa, buscando acercarse al ciudadano de a pie que rechaza al Estado por su experiencia cotidiana de distancia y maltrato y por su relación con servicios insuficientes y de baja calidad.

El compromiso político general que expresó con la descentralización, aunque importante simbólicamente, tuvo un contenido limitado más allá de los anuncios de transferencia de todas las competencias y funciones que puedan asumir los gobiernos subnacionales, la eliminación de prefectos y subprefectos y la descentralización del Sistema Nacional de Inversión Pública. Las ofertas a los departamentos en los que obtuvo malos resultados electorales —el traslado de ENACO al Cusco o la

zona franca de Puno, por ejemplo— complementaron su intervención en esta materia.

En el campo económico, continuó con el curso que iniciara en la segunda vuelta. La revisión conjunta de los contratos con las empresas extractivas y el eventual impuesto a las sobreganancias, se redujo a un proceso de negociación para buscar su aporte voluntario. La renegociación del contrato del gas de Camisea, sin mayores detalles al respecto, quedó como el único asunto concreto en esta materia en la que trató de combinar su voluntad de continuar con el programa económico —de allí su énfasis en la importancia de la inversión privada— con su necesidad de entusiasmar a una población incrédula sobre su futura gestión.

El silencio sobre distintos temas espinosos —el TLC, el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la lucha contra la corrupción, la relación con las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial— fue notorio.

La presentación en el Congreso del nuevo gabinete, si bien precisó algunos aspectos de la intervención presidencial —el cumplimiento del Plan de Reparaciones y la realización de cincuenta experiencias piloto de municipalización de la educación primaria— se mantuvo en el mismo nivel de generalidad, al extremo que el bochornoso e irresponsable anuncio de la supuesta muerte del presidente Paniagua, que interrumpió la presentación de Jorge del Castillo, opacó en los días siguientes su intervención, que tuvo como aspecto más importante el anuncio del acuerdo del Gobierno con las empresas mineras para una donación de 500 millones de soles este año como contribución por sus sobreganancias, que podrían alcanzar los 2.500 millones en el quinquenio.

LA PENA DE MUERTE Y LA AMENAZA DE UN ESTILO

En este escenario, llamó la atención que el primer debate público promovido por el nuevo Gobierno, impulsado por el propio Presidente, fuera alrededor de la propuesta de la pena de muerte para los violadores infantiles. Más allá de algunas intervenciones primarias y patéticas de distintos defensores de la causa presidencial, resultó saludable la opinión discrepante de algunos ministros e incluso de figuras del propio partido gobernante, que lamentablemente fueron llamados al orden y al posterior silencio con rapidez.

Frente al suceso, cabe preguntarse si se trató de una simple falta de diálogo y coordinación, comprensible en el primer momento de un nuevo gobierno, o si, por el contrario, fue una prueba que el Presidente construyó en un escenario propicio —una opinión pública que más allá de cualquier razón demanda sanciones drásticas en la materia— para dejar en claro los alcances y los límites de su relación con el gabinete.

Esta sensación, por demás incómoda, se reforzó con la imagen del deplorable trato recibido por el Canciller a propósito del costo de los pasaportes, divulgada por la televisión nacional, como por las llamadas telefónicas que recibieron varios ministros a raíz de la atención presidencial a los pobladores de Cayara. El tradicional protagonismo de García, que hay que reconocer bastante controlado hasta ahora, parece amenazar con la «presidencialización» de la política cotidiana que tanto daño hiciera en el pasado.

Las recientes declaraciones de un funcionario independiente invitado al cargo que ocupa por el Gobierno —Hugo Ney-ra—,² que hizo público su malestar por la falta de decisiones sobre el futuro de la Biblioteca Nacional apelando al Presidente, se inscriben en esa perspectiva que no es ciertamente la mejor.

LAS PRIMERAS NUBES

La difícil negociación con las mineras y el conflicto entre Yanacocha y la comunidad de Combayo le recordaron al Gobierno las urgencias y la conflictividad de la realidad. El acuerdo logrado con las empresas resultó seguramente distante de las expectativas gubernamentales. La muerte de un comunero, el posterior bloqueo de una carretera y la paralización de las actividades de la Newmont evidenciaron la complejidad de los problemas que agobian al país y la necesidad de un Estado fuerte, con orientaciones claras. El Premier demostró sus dotes de operador político y logró resolver, por el momento, una situación difícil. Resistió las presiones por una intervención policial que «restaure el orden» y alcanzó acuerdos básicos con las partes.

Más profundamente, quizá descubrió que ningún partido político tiene capacidad de articulación o de control de la movilización social en el país, especialmente en las zonas rurales. El alcalde provincial y

el presidente regional, apristas ambos, no han podido hacer nada frente a la creciente insatisfacción social que se encuentra, sin duda, a la base del conflicto. En este caso como en otros, ella aparece ya como permanente.

El Premier y el Gobierno todo deben entender que se necesita de políticas más claras y precisas que las insinuadas hasta ahora. La presencia y el compromiso del Estado en el territorio nacional son indispensables, las políticas que aborden los problemas centrales de la gente no pueden seguirse haciendo esperar. Quizá el anunciado discurso presidencial de septiembre, que reimpulsaría el proceso de descentralización, adelante algunas luces al respecto. De lo contrario, y a pesar del virtual suicidio del humalismo que ha generado la ilusión de un paradójico gobierno minoritario sin oposición, los calores del verano pueden adelantarse. ■

1 Responsable de Comunicaciones y Acceso a la Información del Grupo Propuesta Ciudadana

2 *Perú.21*, 4 de septiembre de 2004.